



**SÍNDICO PROCURADOR DEL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA**

VS.

**DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE
COBRANZA DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DE BAJA CALIFORNIA.**

EXPEDIENTE: 141/2022

SENTENCIA DEFINITIVA.

Mexicali, Baja California, **catorce de noviembre del dos mil
veintidós.**

SENTENCIA DEFINITIVA, que decreta el sobreseimiento del presente juicio contencioso administrativo con fundamento en el artículo **55** fracción II, en relación con el numeral **54, fracción II**, ambos de la Ley que rigen a este Tribunal.

GLOSARIO.

- **Síndico**: Síndico Procurador del Municipio de Mexicali, Baja California.
- **Directora Jurídico**: Directora Jurídica y de Cobranza del Servicio de Administración Tributaria de Baja California.
- **Ley**: Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
- **Tribunal**: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
- **Juzgado**: Juzgado **Primero** del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

ANTECEDENTES DEL JUICIO.

I. Presentación. El escrito de demanda se recibió en el **Juzgado** el **veinticinco de febrero del dos mil veintidós.**

II. Acto impugnado. La parte actora demanda la nulidad del siguiente acto:

➤ La resolución de fecha *treinta y uno de marzo del dos mil veintidós*, contenida en el oficio número ******1*, emitido por la *Directora Jurídica*, mediante el cual resuelve el recurso administrativo de revocación ******2*, en contra del requerimiento de pago con número de oficio ******3*, de fecha *quince de septiembre del dos mil veintiuno*, recurso presentado por la persona moral oficial *Síndico*.

III. Admisión. La demanda se admitió a trámite en acuerdo del *primero de marzo del dos mil veintidós*.

IV. Contestación de demanda. Al juicio compareció a contestar la *Directora Jurídico*, en términos del escrito visible en autos.

V. Citación. El *veinticuatro de octubre del dos mil veintidós*, *quedó* cerrada la instrucción del juicio; por lo que el suscrito Magistrado se encuentra en condiciones de resolver la controversia planteada.

COMPETENCIA

Este *Juzgado* es competente para conocer del presente asunto por razón de la materia, al promoverse en contra de un *acto administrativo* emitido por una *autoridad estatal*; de conformidad con lo dispuesto por el artículo **26**, *fracción I*, de la *Ley*

Así también, este *Juzgado* es competente para conocer del presente juicio conforme a lo previsto en el artículo **26**, *último párrafo*, de la *Ley*, ya que el domicilio particular que señaló la parte actora se encuentra dentro de su circunscripción territorial.

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

I. Improcedencia del juicio por carecer de interés jurídico la parte actora para reclamar la nulidad del acto impugnado.

El primer párrafo de la fracción II del artículo **54** de la *Ley* establece lo que debe entenderse por interés jurídico; como se expone a continuación:

“ARTICULO 54. El juicio ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es improcedente contra actos o resoluciones:

[...]

II. Que se hayan consumado de modo irreparable o que no afecten el interés jurídico del demandante, entendiéndose por éste, la afectación de un derecho subjetivo o la lesión objetiva al particular derivada de un acto administrativo o por una resolución de las autoridades fiscales contrarios a la ley;”

Atendiendo al contenido del dispositivo legal transcrito, una de las condiciones para que exista el interés jurídico como derecho subjetivo público, es la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida, esto es, que el acto impugnado produzca una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, por ser el titular del derecho subjetivo.

En cuanto a la lesión objetiva, la Primera Sala del *Tribunal [ahora Juzgado Primero]* ha emitido tesis aislada relevante¹ en el sentido de que, para acreditar su existencia, basta con que indirectamente al demandante se le ocasione un perjuicio, siendo un interés calificado por la posición de hecho en que se encuentra o por ser el destinatario del acto administrativo.

Para la controversia planteada, *el Síndico*, reclama la nulidad² de lo siguiente:

¹**INTERES LEGÍTIMO PROCEDE SU TUTELA JURISDICCIONAL CUANDO SE AFECTA POR ACTO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A DERECHO;** consultable en el Boletín del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, Año 9, Números 15 y 16, Enero-Agosto 1999.

² Si bien es cierto no señaló como acto impugnado el requerimiento de pago, lo cierto es que al ser un juicio de litis abierta el actor expuso un motivo de inconformidad contra el acto que fue recurrido dentro del recurso presentado, como lo establece el artículo **66**, *fracción VII y último párrafo* de la *Ley que rige a este*

➤ Requerimiento de pago con número de oficio *****3, de fecha *quince de septiembre del dos mil veintiuno*, suscrito por el *Recaudador de Rentas Estado en Mexicali, Baja California*, a efecto de conseguir el cobro de una multa equivalente a *doce veces* el valor por unidad de mediad y actualización, que le fue impuesta al *Síndico*, por el *Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California*; y

➤ La resolución de fecha *treinta y uno de marzo del dos mil veintidós*, contenida en el oficio número *****1, emitido por la *Directora Jurídica*, mediante el cual resuelve el recurso administrativo de revocación *****2, en contra del requerimiento mencionado en el párrafo que antecede, recurso presentado por la persona moral oficial *Síndico*.

Ahora bien, las multas impuestas por órganos jurisdiccionales a entes públicos, constituyen una **sanción para el funcionario público** que deja de cumplir con alguna determinación u obligación a su cargo en el juicio, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate.

Por ende, el requerimiento de pago de la multa impuesta por el *órgano jurisdiccional y del recurso administrativo que confirma su validez*, no afecta el interés jurídico de las personas morales oficiales, como lo es el *Síndico*; puesto que no afecta los derechos patrimoniales de la dependencia pública municipal, sino de las personas físicas que, como servidor público, incurrió en un acto que le hizo ser merecedor de una sanción económica, y quien precisamente por derecho propio está legitimado para impugnarlo ante este *Tribunal*.

Tribunal; motivo por el cual se señala en esta sentencia que también en contra de ese acto argumenta su nulidad.

Por lo tanto, al promover la persona moral oficial como lo es el **Síndico**, el presente juicio y el recurso en sede administrativa³, se concluye que el requerimiento de pago para conseguir el cobro de la multa equivalente a **doce veces** el valor por unidad de medida y actualización, impuesta al **Síndico**, por el **Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California**; y la resolución recaída al recurso administrativo de revocación **descrita en párrafos anteriores**, no inciden en la afectación derechos subjetivos o lesión objetiva del **Síndico**.

Sirven de apoyo a lo antes expuesto, y aplicable por analogía al presente asunto, las tesis de jurisprudencia que se transcriben a continuación:

“TESIS DE JURISPRUDENCIA 1/2018 MULTAS IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMO MEDIO DE APREMIO. SE IMPONEN AL SERVIDOR PÚBLICO QUE INCUMPLA SUS DETERMINACIONES Y NO A LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA PÚBLICA. De la interpretación armónica y teleológica de los artículos 1, 36, 87 y 88 de la Ley que rige al Tribunal, se advierte que el Tribunal puede aplicar multas como medio de apremio con la intención de hacer cumplir sus determinaciones cuando la autoridad demandada no acredita su cabal cumplimiento. Por lo anterior, debe entenderse y así asumirse, que la sanción es impuesta al servidor público o funcionario responsable renuente a cumplir con las determinaciones del Tribunal y no al órgano o entidad administrativa pública independientemente de que su imposición se haga relacionando su nombre, refiriéndose al titular o a la entidad administrativa pública, ya que dicho medio de apremio es una consecuencia legal de su propia conducta como servidor público y, por lo tanto, será él quien verá afectado su patrimonio, pues el monto de la multa deberá cubrirlo de su propio peculio y no con el presupuesto de la entidad administrativa pública, pudiendo llegarse al extremo de que el Pleno de este Tribunal decreta su destitución en caso de que persista en su actitud omisa. De ahí que, una vez fijada la multa

³ Visible en autos y el cual se advierte que fue presentado por el servidor público en su carácter de Síndico.

ésta deber ser ejecutada al servidor público en su carácter de persona física para que la medida de apremio adquiera efectividad y, por razones de certeza, ha de precisarse que la misma es impuesta al servidor público responsable asentando el nombre de la persona física que ostenta ese carácter en el cuerpo del documento donde obre el apercibimiento y la sanción. En consecuencia, será la persona física sancionada quien, en su caso, tendrá legitimación para promover el juicio contencioso administrativo contra los actos administrativos que se deriven de la ejecución de la multa impuesta y no la entidad administrativa pública.

Recurso de revisión 57/2016 T.S. – Promovente: Marco Antonio Dueñas Soto (Oficial Mayor del Gobierno Municipal de Tijuana). – Autoridad demandada: Procurador Fiscal del Estado. – 25 de enero de 2018. – Unanimidad de votos. – Ponente: Carlos Rodolfo Montero Vázquez. Recurso de revisión 61/2016 T.S. - Promovente: Carlos Mejía López (Secretario de Gobierno Municipal de Tijuana). – Autoridad demandada: Procurador Fiscal del Estado. – 25 de enero de 2018. – Unanimidad de votos. – Ponente: Carlos Rodolfo Montero Vázquez. Recurso de revisión 69/2016 T.S. - Promovente: José Manuel Noriega Moreno (Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana). – Autoridad demandada: Procurador Fiscal del Estado. – 25 de enero de 2018. – Unanimidad de votos. – Ponente: Carlos Rodolfo Montero Vázquez. El Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en sesión plenaria celebrada el 8 de febrero de 2018, aprobó por unanimidad de votos la tesis de jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria."

"PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO.

El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en

cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión.

Contradicción de tesis 114/2014. Entre las sustentadas por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México y Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 27 de agosto de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 9/2014, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver la queja 82/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 72/2013.

Tesis de jurisprudencia 103/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de septiembre de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2007622; Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Materias(s): Común, Administrativa; Tesis: 2a./J.

103/2014 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 1044; Tipo: Jurisprudencia."

En razón de lo anterior, y dado que en este juicio el actor [persona moral oficial, como lo es *Síndico*] no demostró tener un interés jurídico para reclamar la nulidad del acto impugnado, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el primer párrafo de la fracción II del artículo 54 de la Ley.

Como resultado de la causal improcedencia en cita, lo conducente es sobreseer y se sobresee del presente juicio contencioso administrativo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 55, fracción II de la Ley.

RESOLUTIVO.

ÚNICO. Con fundamento en el artículo en el artículo 55 fracción II, de la Ley, en relación con el numeral 54, fracción II, de la Ley, se sobresee el juicio contencioso administrativo promovido por el *Síndico*.

Notifíquese por boletín jurisdiccional a las partes.

Así lo resolvió el magistrado titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez; firmando ante la presencia del secretario de acuerdos, Héctor Hernández Estrada, que autoriza y da fe.

1 **ELIMINADO:** Nombre del demandante en fojas 2 y 4.

Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.

2 **ELIMINADO:** Recurso administrativo de revocación en fojas 2 y 4.

Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.



EL SUSCRITO, **HÉCTOR HERNÁNDEZ ESTRADA**, SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR: -----

QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSIÓN PÚBLICA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, ACTUANDO EN FUNCIONES DE JUEZ TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO DE FECHA **CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**, RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO **141/2022** EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS Y/O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIEZ ASTERISCOS; VERSIÓN QUE VA EN **8 (OCHO)** FOJAS ÚTILES.-----

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS **80, 83**, FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; ARTÍCULOS **57, 58, 59, 60** Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, ARTICULO **25**, FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA Y ARTÍCULOS **56 Y 57** DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PUBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS. LO QUE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A **DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES**, DOY FE.--



JUZGADO PRIMERO
MEXICALI, B.C.

R
E
S
O
L
U
C
I
Ó
N

VERSIÓN PÚBLICA